

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO TREINTA DE FAMILIA

Bogotá D. C., dos (02) de septiembre de dos mil veinte (2020)

Rad: 11001-31-100-30-2020-00265-00

Clase de proceso: Acción de Tutela

Procede este Despacho a proferir sentencia dentro de la Acción de Tutela instaurada a nombre propio por el ciudadano **JOSÉ ALFONSO CARDONA CORREA** identificado con cédula de ciudadanía C.C 7524144 contra la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS**.

ANTECEDENTES

El ciudadano **JOSÉ ALFONSO CARDONA CORREA** identificado con cédula de ciudadanía C.C 7524144 inicia acción de tutela contra la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS** por considerar que se le está vulnerando el **DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN** y el de **IGUALDAD**.

HECHOS Y PRETENSIONES

Refiere que interpuso derecho de petición el 04 de marzo de 2020 solicitando ante la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS** que señale una fecha cierta en la cual podrá recibir su carta cheque, pues cumplió con el diligenciamiento del formulario y la actualización de datos.

Indica que la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS** no contesta el derecho de petición, ni de forma, ni de fondo, no señala una fecha de cuándo va a desembolsar el monto de la indemnización por el desplazamiento forzado.

Manifiesta que la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS** al no contestar de fondo su solicitud, no solo viola el derecho de petición, sino que vulnera el derecho a la verdad y a la indemnización, igualdad y demás consignados en la tutela T 025 de 2004.

Que la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS** manifiesta en una de sus respuestas que debe iniciar el PAARI y ya lo inicio, así como también, ya firmo el formulario del plan individual para reparación integral (PIRI) anexando los documentos, y la entidad le manifestó que en un mes pasara por la carta cheque para el cobro de la indemnización por víctima de desplazamiento forzado.

A razón de lo anterior, solicita se ordene a la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS** contestar el derecho de petición de fondo manifestando una fecha cierta en la cual serán emitidas y entregadas sus cartas cheque.

PRUEBAS

La parte accionante anexa a su solicitud, los siguientes documentos:

Copia del derecho de petición dirigido a la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS**, radicado bajo el No. 20207111858182 del 04 de marzo de 2020.

ACTUACIÓN PROCESAL

1.- Admitida la tutela el 20 de agosto de 2020, se ordenó la notificación de la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS**, para que en el término de dos (2) días se pronunciara sobre los hechos materia de la presente acción.

2.- El 21 de agosto de 2020, se notificó a la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS**, a través del correo institucional del Juzgado, informando sobre la admisión de la presente tutela, adjuntando copia de la referida solicitud, quien brindo contestación a la acción constitucional dentro de la oportunidad conferida.

CONSIDERACIONES

Aspectos preliminares

Este Juzgado es competente para conocer de la presente acción, por mandato de los artículos 86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991; numeral 1°, inciso 2°, del Decreto 1382 de 2000; y 38 de la Ley 489 de 1998.

La solicitud satisface las formalidades legales y no se advierten anomalías que invaliden lo actuado, lo cual habilita al Despacho para decidir de fondo el asunto.

Naturaleza jurídica de la acción de tutela

La jurisprudencia constitucional ha pregonado de antaño que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Es claro, entonces, que este instrumento judicial se torna improcedente cuando la persona afectada tuvo o tiene la oportunidad de obtener la protección del derecho que estima amenazado, por los cauces ordinarios y ante las autoridades competentes, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Derecho Fundamental Invocado Como Vulnerado

Con relación al derecho de petición éste se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y fue desarrollado por la Ley 1755 de 2015 donde dispuso el término con el que cuenta el destinatario de dicha petición para responderla el cual manifiesta: “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción...”

En relación con este derecho fundamental ha precisado la Honorable Corte Constitucional:

“El derecho de petición, pese a su autonomía tiene como fuente material los derechos políticos en la medida en que estos facultan al ciudadano para controlar, directa o indirectamente, las decisiones de las autoridades legítimamente constituidas por obra de la participación popular. El núcleo esencial de este derecho está ligado a la necesidad de mantener canales adecuados de comunicación entre gobernantes y los ciudadanos que trasciendan el ámbito político y vinculen al miembro de la comunidad con la autoridad.

El derecho de petición comprende no solo la manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta del caso planteado. El derecho fundamental a la efectividad de los derechos (C.P. Arts. 2 y 86) se une en este punto con el principio constitucional administrativo (Art 209).

La omisión o el silencio de la administración en relación con las demandas de los ciudadanos son manifestaciones de autoritarismo tan graves como la arbitrariedad en la toma de sus decisiones. Los esfuerzos de la Constitución por construir una sociedad más justa y democrática, necesitan ser secundados y de manera esencial por el cumplimiento de la obligación de los funcionarios públicos de responder y resolver de manera oportuna las peticiones provenientes de los particulares.

Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una decisión. Correspondencia e integridad son fundamentales en la comunicación oficial. En segundo lugar, la respuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea. El funcionario no solo está llamado a responder, también debe esclarecer, dentro de lo posible el camino jurídico que conduzca al peticionario a la solución de su problema. Finalmente, la comunicación debe ser oportuna. El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los derechos fundamentales; de nada sirve una respuesta adecuada y certera cuando ella es tardía”. (Sent. T-220/94).

El artículo 5 del Decreto 491 de 2020, dispone: “Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: (i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del

vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales”.

Del caso en concreto.

Corresponde a la Juzgadora determinar si la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS** viola los derechos fundamentales de **PETICIÓN e IGUALDAD** del ciudadano **JOSÉ ALFONSO CARDONA CORREA** identificado con cédula de ciudadanía C.C 7524144 al no proceder a contestar el derecho de petición elevado el 04 de marzo de 2020 y radicado bajo el No. 20207111858182.

Obra derecha de petición, pretendiendo: “1. De acuerdo a lo anterior y de acuerdo al formulario diligenciado en mi caso de hecho victimizante de desplazamiento forzado en particular cuando me entregan la carta cheque.2. De acuerdo a mi proceso, que documentos me hacen falta para esta indemnización.3. Se me otorgue una certificación de inclusión en el RUV”.

En la respuesta allegada por la entidad accionada, a la acción de tutela, se señaló: “La Unidad para las Víctimas, procedió a dar respuesta mediante comunicación escrita, bajo radicado de salida No. 202072020135251 de fecha 24 de agosto de 2020, en la cual se informó al accionante que la Entidad emitió acto administrativo motivado mediante el que se reconoce el derecho a la medida indemnizatoria, cuyo pago está supeditado a la aplicación del método técnico de priorización”.

Por otra parte, en la respuesta dada al derecho de petición, se le informó al accionante: “(...) le informamos que usted elevó solicitud de indemnización administrativa, por lo que la Unidad le brindó una respuesta de fondo por medio de la Resolución No. 01049 del 15 de marzo de 2019, por medio de la cual “se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa, se crea el método técnico de priorización, se derogan las Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de 2018 y se dictan otras disposiciones” en los siguientes términos:

En virtud de lo anterior y con el fin de dar respuesta a su petición, le informamos que usted elevó solicitud de indemnización administrativa, por la que la Unidad le brindó una respuesta de fondo por medio de la Resolución No. 04102019-528378 del 02 de abril de 2020, en la que se le decidió otorgar la medida de indemnización administrativa por el hecho victimizante Desplazamiento Forzado.

Teniendo en cuenta lo mencionado, la Resolución No. 04102019-528378 del 02 de abril de 2020, al realizar el reconocimiento de la medida, dispuso, aplicar el Método Técnico de Priorización, en atención a que no cumplía con los criterios de priorización establecidos en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019.

Por consiguiente, nos permitimos aclararle que, el Método Técnico de Priorización es un proceso técnico de priorización que determina los criterios y lineamientos que debe adoptar la Unidad para determinar el orden más apropiado para el desembolso de la medida de indemnización administrativa de acuerdo con la disponibilidad presupuestal anual ”.

De lo anterior el Despacho pasa a realizar las siguientes consideraciones.

Ha dicho la honorable Corte Constitucional, frente a la contestación de las peticiones que deben emitir las autoridades administrativas “... c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: **1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario...**” (subrayado y negrilla por el Despacho); Es por lo anterior, que se considera que la contestación dada por la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS reúne las características señaladas por la Honorable Corte Constitucional, toda vez que se señaló al accionante que mediante la Resolución No. 04102019-528378 del 02 de abril de 2020, se decidió otorgar la medida de indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado y el pago se efectuará a través de la aplicación del método técnico de priorización; valga la pena mencionar que el accionante no arrimó documental mediante la cual se pruebe su estado de vulnerabilidad manifiesta, por lo que no puede el Despacho apartarse del método de pago que indica la entidad accionada.

Por lo anterior y sin más consideraciones no se tutelarán los derechos fundamentales invocados por el actor.

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR el amparo deprecado por el ciudadano **JOSÉ ALFONSO CARDONA CORREA** identificado con cédula de ciudadanía No. 7524144 contra la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS**, conforme a la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Contra el presente fallo procede impugnación por la vía jerárquica.

TERCERO: Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo de tutela, en caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

CUARTO: Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito. Líbrense comunicaciones.

NOTIFÍQUESE,

Firmado Por:

VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS

JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 30 FAMILIA BOGOTÁ

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

8f6b421ab5c1d9c7e0df19f26c3c6da07cd60589aaca37c68fede4ad06b303e6

Documento generado en 02/09/2020 05:42:10 p.m.